



Honduras **balance**2006



Honduras **balance**2006

FOSDEH
Foro Social de la Deuda Externa
y Desarrollo de Honduras

Col. Alameda, Ave. Tiburcio Carías Andino,
Casa No. 1011, Apdo. Postal 1248,
Tegucigalpa, Honduras
Tel/fax: (504) 239-2110/14

Correo electrónico: contacto@fosdeh.net

Página web: www.fosdeh.net

Diseño gráfico: PROYECTO 2

Contenido

Palabras Previas	7
El Marco de la Gobernabilidad	9
El Marco Económico	15
Lo Social	18
Modelo Económico versus Modelo Social	22
Vulnerabilidad Latente y Creciente	26
¿Desafíos?	27

Palabras previas

Como es ya costumbre, el FOSDEH publica cada fin de año su Balance Anual. Un análisis que no pretende agotar el tema de lo que ha pasado en el país, pero si relevar sus tendencias generales y para dónde se encamina.

Para nuestra organización es muy satisfactorio encontrar ejemplares del Balance en los lugares más recónditos; en una Caja Rural en un pequeño pueblo de La Paz, en un centro de capacitación social donde se concentran jóvenes y mujeres, en la sala de redacción de un periódico e incluso en las oficinas de los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o agencias de cooperación. Nos consta que se lee y discute. De eso se trata este esfuerzo, no de pretender monopolizar la verdad, sino de ponerla a debate.

Como siempre, también, quisiéramos ser portadores sólo de buenas nuevas, pero el país no da para eso. La construcción de una nación mejor, más igualitaria y justa, sigue pendiente. Tenemos este año nuevo gobierno, pero los cambios prometidos a nivel del discurso difieren mucho de la realidad. La pobreza extendida y ahondada por las desigualdades extremas es todavía el desafío principal de nuestra precaria gobernabilidad.

¿Qué resalta de nuevo en el Balance 2006 respecto al del 2005?

1. Un contexto macroeconómico relativamente estable, que le puede permitir al gobierno impulsar varias reformas y que depende en alto grado de las remesas de los emigrantes. Se perfila cierto cambio en la negociación que habrá entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renovar el convenio bilateral que finaliza en diciembre.
2. La continuidad del proceso “integracionista centroamericano”, marcado más por el liderazgo de los grandes capitales (hay una movilidad intensa del capital financiero regional en Honduras) que de políticas estatales.
3. Una agenda ciudadana más cargada, que combina demandas gremiales (aumentos salariales) con reivindicaciones nacionales (nuevas leyes).

4. Una Gobernabilidad frágil e incierta. El nuevo Gobierno asumió en un contexto plagado de conflictos y problemas acumulados (sobresaliendo la negociación del estatuto laboral de los maestros y los médicos y el tema de la inseguridad ciudadana).

5. Las características que asume la transición, entre continuidad y cambio, con un nuevo gobierno fragmentado en islas de poder político y empresarial que limitan las posibles decisiones del Presidente Zelaya.

6. Se mantiene una alta dependencia del presupuesto social de recursos de la cooperación internacional. La Estrategia para la Reducción a la Pobreza (ERP) está sometida a cambios de incierto resultado.

Esos aspectos son claves en la lectura que ponemos en manos de nuestros amigos y amigas, confiando en que contribuyan a brindar elementos adicionales sobre la realidad nacional para adoptar posiciones firmes y consecuentes para una Honduras mejor.

Mauricio Díaz Burdett
Coordinador del FOSDEH
Diciembre, 2006

El marco de la Gobernabilidad

Las condiciones políticas para el desarrollo siempre alientan nuevas expectativas con los cambios de gobierno, pero cumplirlas depende de las condiciones en que se recibe el poder y la calidad de gestión del nuevo equipo.

Como se recordará, en enero no hubo transición efectiva. El nuevo equipo llegó a ver que encontraba, mientras el saliente mantenía una campaña pública diciendo que “la mesa estaba servida”.

El debate debió haber sido productivo, es decir, colocando a trasluz las políticas económicas vigentes, pero la nueva administración dejó pasar os meses hasta que la crítica al ex presidente, Ricardo Maduro, se volvió insostenible.

FMI, socio de quién

Luego de realizar en diciembre la última evaluación formal a los indicadores macroeconómicos, de la Administración Maduro, el FMI indicaba, a través de un comunicado de prensa, que “La aplicación de políticas macroeconómicas bien concebidas por parte de las autoridades hondureñas y el avance con las reformas estructurales al amparo del programa respaldado por el FMI siguieron dando resultados positivos. En 2005 se mantuvo robusto el crecimiento económico y se prevé una caída de la inflación pese a que subieron los combustibles... Se ha fortalecido la situación fiscal, lo que obedece en particular al control del gasto público sobre todo en cuanto a la masa salarial y a una recaudación impositiva mejor de la prevista.”

En contraste, un día antes de esta declaratoria, el Congreso Nacional aprobó la emisión de **bonos** por el orden de los **2,100 millones de lempiras** para cubrir las millonarias deudas que mantienen las municipalidades de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Por fortuna, esos acuerdos no fueron ratificados por el Poder Legislativo entrante. Quizá se recordó que ya existía un precedente lamentable, con el caso de la condonación de deudas agrícolas, de lo insostenible que es para el país la emisión de bonos y certificados de absorción monetaria que aumentan la deuda interna y cuyo costo en cuanto al servicio de la misma supera el alivio anual de la deuda externa. El mismo FMI en su Carta de intenciones indica que este tipo de acciones “han resultado en costos elevados y de un impacto distributivo desigual”, sin embargo, ese dato no fue tomado en cuenta en la valoración de cierre. Hubo felicitaciones, no críticas o evaluaciones orientadoras.

Salvo FOSDEH, nadie le ha pedido al FMI que sea coherente entre lo que dice, lo que exige y lo que realmente ocurre en el país. Ese mismo criterio, pero sin revelarlo públicamente, expresó el gobierno liberal, cuando señaló que recibía una herencia llena de conflictos sociales sin resolver y con un déficit fiscal bajo a causa de una represa construida alrededor del gasto social. Ahora estamos con criterios similares de parte del Fondo, aunque las relaciones bilaterales hayan marchado mejor con el ex presidente Maduro, que con el actual presidente

Zelaya. En este momento hay voces empresariales que afirman que si la macroeconomía anda tan bien como se dice, entonces ¿para qué sirve negociar nuevos y drásticos convenios con el FMI?

Desde el FOSDEH se solicitó en el 2006 una revisión de las relaciones con el FMI, pero no en la perspectiva de dejar sueltas las manos de los gobernantes, que como se vio en el caso de la ERP no son de confiar, sino en revisar la parte sustantiva de los acuerdos, aquella que marca compromisos y rumbos. La propuesta ciudadana es clara: estabilidad macroeconómica y macroeconómica con equidad social. Desafortunadamente, atreverse a plantear un cambio de dirección en las relaciones bilaterales con el FMI implica poner las prioridades nacionales por delante de las prioridades externas.

Bajo esas circunstancias, el 2006 lo marcan dos hechos: la gestión de un nuevo Presidente, Manuel Zelaya Rosales, que carecía de un plan efectivo de gobierno, y un relevo traumático del Partido Nacional por el Liberal.

En el año, el Presidente Zelaya Rosales encontró la fórmula de una Gobernabilidad precaria accediendo a la mayoría de las demandas de los gremios más fuertes – maestros y trabajadores de la salud- y de los sectores empresariales ligados a la exportación y al capital transnacional. A falta de un programa de gobierno – el que presentó en las elecciones nunca fue considerado dentro del Partido Liberal un verdadero plan- su gestión se ha caracterizado, para muchos, por apagar fuegos a costa de los recursos fiscales, y, en particular, de los fondos de alivio a la pobreza.

En ningún momento las autoridades han presentado una estrategia nacional, coherente y articulada, para sacar adelante al país. El primer año se fue dejando ese vacío aunque hubo propuestas importantes de diversos sectores, entre ellos una red de 28 organizaciones – dentro de la que se incluye el FOSDEH- que le entregó un documento titulado “Queremos ser escuchados”, conteniendo iniciativas ciudadanas en 15 grandes temas.

Respecto al relevo traumático, varias razones lo explican, entre ellas: a) el Presidente Zelaya ganó con apenas 23% del voto (el porcentaje más bajo en los 25 años de democracia) ; b) 49% de abstención/ausentismo (el porcentaje más alto registrado); c) El Tribunal Suprema Electoral (TSE) fracasó en su responsabilidad de gerenciar un proceso electoral transparente d) No hubo una transición ordenada entre la Administración Maduro y la de Zelaya, y e) el relevo en el poder recrudesció prácticas de política sectaria, con el despido de la mayoría de los empleados públicos nacionalistas y su reemplazo por activistas liberales.

Un proceso electoral inconcluso

Acostumbrados a los desaciertos de la dirigencia política hondureña, la ciudadanía no prestó la atención debida al lamentable proceso electoral que vivió el país en sus dos etapas: primarias (febrero) y generales (noviembre). Con un margen de diferencia muy estrecho entre los candidatos mayoritarios resulta anormal que la declaratoria final de elecciones se haya dado sin el recuento final de los votos, y sin que hubiera mecanismos efectivos para resolver las impugnaciones. Y esa es apenas la punta del hilo puesto que este proceso electoral en

su conjunto marcó un retroceso en la credibilidad que se venía acumulando. La reforma electoral del 2001 en relación a la despolitización partidarista del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no funcionó. De hecho, la mala gestión del Presidente del TSE fue “premiada” con su designación como Ministro de Defensa. En el balance fue buena la incorporación de las fotografías y el mecanismo del más votado, pero resulta que ahora están en riesgo por los intentos de impulsar contrarreformas que cierren el sistema, en lugar de abrirlo. El 2006 debió ser un año de reforma completa del sistema electoral, pero no ocurrió así, más bien se ha permitido al Presidente del Congreso Nacional, intentar burlar los compromisos y lanzar –embozadamente- su aspiración presidencial para el 2009. Lo positivo en el saldo es que desde la ciudadanía ya surgen propuestas serias de reformas electoral.

La ausencia de una carrera de servicio civil y la falta de continuidad de políticas públicas compromete la eficiencia del gobierno. El Presidente Zelaya se convirtió en el séptimo presidente civil electo desde 1980 (lo cual es un logro), pero su administración es una de las que comenzó con mayores niveles de conflictividad e incertidumbre, lo que contrasta con un contexto macroeconómico estable que le da la oportunidad de impulsar reformas pendientes y nuevas. Ello implica, sin embargo, enfrentar y/o negociar con grupos fácticos poderosos y de gran influencia en el Congreso Nacional, donde los diputados seguidores del Presidente Zelaya son escasos. El gobernante tiene una limitación adicional: no controla a su partido, lo que contrasta con el resto de los partidos políticos que también están controlados por familias poderosas e influyentes. Precisamente esa es una de las razones que explica la conformación de su gabinete, tratando de dar a cada facción interna (aspirantes presidenciales) una cuota ministerial o un cargo público a cambio de respaldo o estabilidad .

EXCANDIDATO (A)

CARGO MINISTERIAL

Gabriela Núñez

Presidenta del Banco Central

Hugo Noé Pino

Secretario de Finanzas y, luego, Representante de Honduras ante el BID.

Marlon Lara

Ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

Rafael Pineda Ponce

Secretario de Educación

Jorge Arturo Reina

Secretario de Gobernación y Justicia

Jaime Rosenthal fue representado en el nombramiento de su hijo,

Ministro de la Presidencia

Yani Rosenthal

Vera Rubí

Directora de la Marina Mercante

Esa táctica ha funcionado a medias puesto que la dirección del Partido Liberal sigue con Patricia Rodas a la cabeza, una reconocida dirigente de la corriente “relista”, que cada vez tiene menos poder interno. El centro de gravedad del poder se orienta a otros liderazgos caudillescos, encabezados por ex presidentes liberales y el titular del Congreso Nacional.

En términos generales, la inestabilidad ha sido una constante en el gabinete del presidente Zelaya, con altos funcionarios entrando y saliendo de la administración pública, algunas veces víctimas de intereses mucho más poderosos que ellos.

A casi un año de su mandato, la gestión de el Presidente Zelaya Rosales sigue proyectando carecer de una agenda definida, y en la improvisación ha sido calificada en ciertos círculos políticos, diplomáticos y empresariales como “populista” o “neopopulista”, sobre todo por intentar romper el monopolio en el abastecimiento de combustible de las transnacionales norteamericanas y por críticas a sectores privados que el Presidente no identifica por su nombre.

Entre los críticos más conservadores (parte de la elite empresarial de San Pedro Sula) se le considera “vulnerable” a la presunta influencia “izquierdista” de algunos de sus asesores. Los calificativos de “populista”, “neopopulista” o “izquierdista” parecen infundados. Hasta ahora el gobierno no propone o muestra un proyecto o modelo de sociedad diferente y, tampoco, dispone de recursos financieros (petróleo, gas) o políticos (un partido gobernante unido, un Congreso bajo su control) que le permitan pasar de un discurso “virtual” de cambios a uno “real”.

El gobernante hondureño está lejos de ser considerado parte del club de los Gobernantes latinoamericanos que encabeza el venezolano Hugo Chávez, aunque ello no ha impedido ciertos coqueteos que durante el año crearon una aparente fricción con la diplomacia de Estados Unidos.

En el fondo, el Presidente Zelaya encabeza una gestión más “anárquica” que “populista” puesto que su prioridad – como ha sido contener los conflictos sociales satisfaciendo las demandas de los gremios más fuertes (docentes, trabajadores de la salud) y tratar de dar respuesta a sus propias ofertas electorales proselitistas.

Al final del año había invertido 500 millones de lempiras en nuevos subsidios, sin incluir una cifra similar para mantener estable el precio de los combustibles. Sus principales decisiones de Estado han estado vacías de ciudadanía (dos ejemplos: la Ley de Participación Ciudadana se aprobó sin tomar en cuenta a la ciudadanía y la propuesta de Política Nacional de Juventud no ha consultado a la juventud).

En otros casos, su compromiso ha sido débil o vacilante respecto a demandas claves, como la aprobación de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Desde la tribuna, el Presidente Zelaya apoya esa iniciativa, pero en la práctica la deja al gusto de quienes dirigen el Congreso Nacional.

De mayor riesgo que un eventual “populismo” es un aparente resurgir de la disputa ideológica anacrónica entre “izquierda” y “derecha”, supuestamente superada en el país. Las posiciones polarizantes en temas como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, reforma agraria y/o desarrollo rural, compra y suministro de combustibles, macro proyectos (como la Represa El Tigre), conflictos sociales (magisterio, salud, etc), sociedad civil, transparencia y rendición de cuentas, y otros

muestran posiciones encontradas que responden a una encrucijada de fondo en el país: **modernización o estancamiento, progreso o atraso.**

Con un desarrollo humano “estancado”

En septiembre, el PNUD divulgó el Informe sobre Desarrollo Humano titulado “Hacia la expansión de la ciudadanía”, en el cual se constató el estancamiento del país en materia de desarrollo humano. Sostiene que en el período 2001- 2004, los cambios en el Índice de Desarrollo Humano (educación, salud e ingreso per-cápita), han sido bastante lentos, pasando de 0.660 a 0.664, ubicando al país, como uno de desarrollo humano medio.

Son varios los elementos que explican el referido estancamiento. Entre estos destacan: a) **una economía** con un crecimiento bajo, no sostenido y sin suficiente generación de empleo productivo; b) **un Estado**, que aunque con avances importantes en su modernización, aún presenta una institucionalidad con ciertas fragilidades y niveles restringidos de efectividad, que han conllevado a un bajo nivel de confianza por parte de la ciudadanía, y c) una ciudadanía cada vez más restringida a la vida privada, en una sociedad donde crece la violencia cotidiana y donde aumenta la emigración.

Lo anterior, sugiere la urgente necesidad de un cambio en Honduras. El cambio supone promover el desarrollo humano a partir del fortalecimiento de una ciudadanía activa. El Estado y la economía tendrían que trabajar conjuntamente a favor del desarrollo humano de Honduras. Se requeriría:

- Avanzar de una economía de bajo crecimiento económico, baja productividad, alta concentración en pocos productos exportables, con sectores con bajo valor agregado, con altos niveles de desigualdad y pobreza; a una economía incluyente que genere un crecimiento económico sostenido en niveles que permitan la expansión del ingreso per- cápita y de las oportunidades y activos económicos. Un desempeño económico acompañado por acciones de política pública que disminuyan la desigualdad en la distribución del ingreso y en el acceso a los servicios sociales básicos, como la salud, la educación y la seguridad social.
- Transitar de un Estado con una institucionalidad relativamente frágil y con niveles restringidos de desempeño institucional, efectividad y credibilidad; a un Estado fuerte y eficaz, que implica por un lado la eficiencia en su gestión y por otro su compromiso con el bien común. Lo anterior no significa necesariamente un Estado grande. Se trata de un tipo de Estado capaz de asumir la intermediación entre la economía y la sociedad, guiando el posicionamiento de la nación en la globalización y buscando la integración social al interior. No es un Estado dirigista, sino coordinador, que representa realmente el conjunto de la sociedad.
- Dejar atrás una ciudadanía con libertades básicas insatisfechas. Una ciudadanía, con bajo involucramiento en los asuntos de interés común. Temerosa y desinformada. Logrando una ciudadanía con amplia capacidad de acción colectiva, determinada por fuertes lazos de confianza, tolerancia, solidaridad y respeto mutuo entre las personas y hacia las normas que rigen estas relaciones. Una ciudadanía activa, con un fuerte vínculo y compromiso social.

Ante esa realidad, el sector más conservador del país ha consolidado una alianza político-empresarial o empresarial-política que ve con profundo recelo y oposición el surgimiento de redes sociales que animan reformas a fondo en la sociedad hondureña (minería, medio ambiente, agua, agro, transparencia, acceso a la información pública, pobreza y otras) que posibilitan nuevas formas de ejercicio político y de gobierno más participativas y menos excluyentes.

El huracán Mitch probó, tanto en su etapa de emergencia como de reconstrucción, que la relación entre la Representación del Poder Público y la Sociedad Civil es clave para sacar adelante al país, pero en la práctica no ocurre de esa manera pese a que hay aportes sustanciales al debate que siguen vigentes y que el FOSDEH retoma.

Una relación que no se quiere entender

Dos debilidades esenciales se pueden apreciar en la construcción de este entramado participativo entre Estado-sociedad civil y que, por ende, afectan las posibilidades de cimentar una gobernabilidad democrática en el país. En primer lugar, las organizaciones que suelen generalmente acceder con protagonismo a estos mecanismos no son organizaciones de base ni tampoco suelen estar conectadas estrechamente a la mayoría poblacional; y en segundo lugar, la voluntad política del gobierno para potenciar estos acercamientos no parece explicarse en términos de una fuerza endógena proveniente desde esta esfera, es decir, que no se observa con claridad el convencimiento de las elites políticas sobre la importancia del dialogo con la sociedad civil, de manera que podría suponerse que la apertura se debió más que todo a la presión conjunta de la sociedad civil y los cooperantes. He aquí un reto importante para la democratización del país: dotar de legitimidad a estos y otros espacios que en el futuro se puedan crear para fortalecer las relaciones entre las autoridades y la ciudadanía organizada. En general, se percibe que han sido las ONG las que mejor han utilizado la capacidad de incidencia para influir sobre los asuntos públicos. Aquí se identifica uno de los nudos problemáticos para describir y analizar la sociedad civil en Honduras y que tiene que ver con el protagonismo alcanzado por las ONG's (Organizaciones No Gubernamentales) en el espacio público frente a una especie de letargo de las formas asociativas tradicionales. Para el caso hondureños son las ONG las que han reaccionado mejor para desenvolverse en el nuevo escenario de las relaciones Estado-sociedad, fruto del dominio de habilidades como el conocimiento del contexto de la cooperación internacional, especialización funcional temática, capacidad de ejecución de proyectos puntuales, capacidad de incidencia política, entre otras. A estas destrezas se suman dos características, que no precisamente pueden ser consideradas como habilidades, pero que influyen en lo que aquí se está expresando. Primero, su mayor flexibilidad para orientar su dirección temática en tanto son organizaciones más pequeñas, sin mayores vinculaciones representativas con una base. Segundo, por lo general presentan una menor polarización ideológica que les permite establecer un mayor número de alianzas coyunturales para alcanzar sus fines. Por su parte, en los llamados viejos actores, tales como las organizaciones obreras y campesinas, se muestra un aparente desgaste de su horizonte reivindicativo. Esto se observa en dos vías: por una parte, la línea dominante societal resta centralidad a estos actores y los ha forzado a refugiarse en demandas parciales de carácter gremialista; y por la otra, los propios actores tradicionales no han sabido renovarse

para que, sin perder algunos elementos sustanciales de su origen histórico, puedan interpretar y posicionarse en el nuevo escenario sin caer en el juego de la ideología en boga. (Cáliz, Álvaro. La emergencia de la sociedad civil en Honduras: la dinámica de la esfera pública no estatal. 2003)

Con la agenda social cargada de demandas y con la actitud de desconfianza mutua, lo visible en el 2006 es una inestabilidad interna que no ha podido ser resuelta. La falta de acuerdos o consensos nacionales resalta en esta coyuntura, con una alta responsabilidad del Congreso Nacional, paradójicamente el poder del Estado que mejor debiera reflejar el clamor de la ciudadanía. La historia inconclusa de la Ley Forestal o de lo acontecido a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública prueba que el Parlamento está bajo el control de un poderoso lobby empresarial, reacio a cualquier cambio significativo. Quizá eso impulsó, a fines de año, a la Secretaría de Finanzas para anunciar su intención de promover un **Pacto de Responsabilidad Social con Equilibrio Fiscal**, con un marcado acento en la inversión pública social, pero que resultará inviable sin un acuerdo de las elites políticas y las organizaciones ciudadanas que lo respalden. Esa iniciativa tendrá en el 2007 el año crucial para prosperar o perecer.

El marco económico

De acuerdo con el FMI, Honduras cierra el año en condiciones macroeconómicas favorables. A nivel externo se citan la integración regional y el TLC (la relación comercial de Centroamérica con EEUU crece a un ritmo de 4% anual); y en lo interno se mencionan un buen desempeño macroeconómico (un crecimiento económico entre 4.5% y 5.5%, una tasa inflacionaria promedio de 6% o 7%, un déficit fiscal de 2.5%, una devaluación controlada de la moneda nacional frente al dólar y reservas internacionales netas para sostener seis meses de importaciones) y se cuenta con el alivio de la deuda pública (los niveles de sostenibilidad de la deuda mejoraron con el arribo al Punto de Culminación/HIPC, la condonación aprobada por el Club de París y por el G-8, al grado que el nivel de deuda bajó de 80% a 40% respecto al PIB).

Los expertos apuntan que el gobierno se beneficiará que en los últimos 3 años el crecimiento económico ha repuntado por encima del promedio histórico de los últimos 15 años, al grado que el país ha sido capaz de evitar en el 2006 la política de **paro y crecimiento**, característica de cada cambio de gobierno.

Esas son buenas noticias, sin embargo, detrás de ella hay realidades ha tomar en cuenta, una es que el factor dinámico de crecimiento ha sido el consumo, no la inversión y, la otra, que los empleos generados no satisfacen la demanda y las remuneraciones son precarias. Las fuentes más importantes de divisas y de crecimiento económico no son las exportaciones (el déficit comercial para el 2006 será el mayor de los últimos años), ni el turismo o la explotación minera, sino que las remesas.

El contexto de las remesas

Las remesas, el volumen de dinero que los inmigrantes envían a sus familiares en sus países de origen, representan hoy el flujo más estable y creciente de fondos hacia América Latina y el Caribe.

América Latina y el Caribe es la región del mundo que captura el mayor volumen de remesas. Más de US\$ 230 mil millones de remesas fueron enviadas a nivel mundial por los inmigrantes en 2005, de los cuales, la región capturó US\$53,6 mil millones o 24,5%, seguida por Asia del Sur con unos US\$32 mil millones o 13,9% del total.

En 2005, las remesas hacia América Latina y el Caribe representaron el 2,67% del Producto Bruto Interno (PBI) de la región, 10,4% del valor total de las exportaciones y 11,25% del valor total de las importaciones en 2004. Según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los flujos de remesas capturados por América Latina y el Caribe alcanzaron los US\$ 53,6 mil millones en 2005.

El fenómeno de las remesas parece no tener fin en la región. Su importancia crece día a día. Las remesas se han más que triplicado en valor desde la década pasada cuando alcanzaban apenas los US\$10 mil millones, siendo su tasa de crecimiento mucho más acelerado que la de la migración. Este crecimiento explosivo ha llevado tanto a profesionales de varias disciplinas (economistas, politólogos, sociólogos, etc.) como a organizaciones internacionales, a asegurar que el papel que juegan las remesas en las economías de los países que las reciben es mucho más importante que el rol que tiene la inversión extranjera directa, las inversiones privadas nacionales y/o publicas, y la ayuda para el desarrollo que recibe la región.

En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, las remesas resultan más abultadas que cualquiera de los flujos mencionados anteriormente y, en algunos casos, sobrepasan la suma combinada de todos ellos. Esto ocurre aún cuando el volumen de remesas que registran los países en sus cuentas nacionales sólo representa el 50 por ciento del ingreso real. El total es muy difícil de contabilizar debido a los abultados volúmenes que son enviados por canales informales como lo son las remesas en “especies” (alimentos, vestimenta y otros productos de consumo), los envíos por correo o a través de un amigo o familiar que viaja. También es posible observar sistemas de contabilidad imprecisos en la mayoría de los países de la región, lo que incrementa aún más la brecha entre el volumen “real” y el “registrado” de remesas hacia América Latina y el Caribe.

Las remesas son importantes para todos los países de la región, pero en particular para los países más pequeños y pobres de América Central y el Caribe, donde representan un abultado porcentaje de los principales indicadores de la economía.

Por ejemplo, las remesas representaron a junio de 2006 alcanzaron los 1,070 millones de dólares y se espera que al cierre del año este monto ronde los 1,900 millones. Este monto representa el 21 % del Producto Interno Bruto del País (PIB)

Son las remesas y no la reactivación de la producción nacional, las que explican los anuncios

oficiales, de que la macroeconomía está bien. Sin embargo, las remesas han incrementado el consumo mismo que se satisface con importaciones que han generado aumento en el déficit de la balanza comercio con el exterior

Desde que el monto de las remesas crece, la paridad real cambiaria de la moneda ha sido estable y se incrementa año con año el monto de las importaciones. Se estima que 80% de las remesas se destinan a consumo y financiar importaciones. La contraparte de las remesas es (éxodo) la pérdida de capital humano para el país. Con un promedio de envío de 150 a 190 dólares mensuales por emigrante, significa que los 2.412 millones de dólares en remesas esperados en el 2006 equivalen al esfuerzo de 1,3 millones de hondureños en el exterior, especialmente en EEUU, y que el crecimiento previsto a 3,015 millones de dólares en el 2007 requiere de unos 300 mil emigrantes más. Mantener ese ritmo demanda exportar 18% de la Población Económicamente Activa (PEA).

En lo social, las remesas tienen un impacto significativo en la reducción de la pobreza (el pobre se salva a si mismo) pero no en la distribución del ingreso. El país requiere una política nacional migratoria y de manejo de remesas que fomente la inversión nacional y el empleo. Demanda, por ejemplo, canalizar una parte significativa hacia usos productivos a través de la generación de incentivos y políticas adecuadas; moderar y administrar las tendencias a la apreciación cambiaria; debe haber una efectiva regulación bancaria para evitar la concentración actual de la intermediación en pocas manos y reducir los costes de las transacciones. Si no se toman las decisiones correctas, la pregunta que varios sectores se hacen en Honduras es ¿qué ocurrirá en el país si por diversas razones frena el crecimiento de las remesas?

Históricamente, las exportaciones han girado alrededor de un número reducido de productos tradicionales, principalmente café y banano, lo que ha redundado en una alta vulnerabilidad ante impactos externos. A inicios de los noventa, estos productos en conjunto solían representar 60% del total de las exportaciones de bienes, y para el cierre de 2005, este porcentaje se redujo a 33% del total, producto de la tendencia a una mayor diversificación de las exportaciones no-tradicionales, especialmente de productos de la maquila (textiles), cuyo valor agregado pasó en 2000 de 22% en relación al total exportado a 25% en 2005.

Esa tendencia es positiva, pero no basta. En ese contexto, hay coincidencia en que el desafío es dar continuidad (estabilidad) a los aspectos positivos de la macroeconomía, impulsar las reformas estructurales dirigidas a fortalecer el crecimiento económico y reducir efectivamente, no teóricamente, la pobreza. La insistencia del FOSDEH en que el gobierno volviera **real** el fondo **virtual** para la ERP fue constante a lo largo del año, como consta en las actas del Consejo Consultivo de la ERP, mismas que al cierre del año fueron aprobadas, de manera parcial, por el Congreso Nacional.

Lo que se solicitaba por parte de sociedad civil era que la totalidad de la condonación de la deuda externa fuera descentralizada a nivel municipal (para el 2006 el monto de la condonación fue de 2,770 millones), no limitarse a 700 millones.

Una lluvia de millones que no moja

El anuncio gubernamental de que este año invertiría unos 7,713 millones de lempiras a favor de las municipalidades despertó una avalancha de expectativas no cumplidas al cierre de 2006. En esa cantidad están incluidos los 700 millones de lempiras de la ERP; 810. 5 millones de lempiras del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS); 1,160 millones de las transferencias municipales (5 por ciento de los ingresos corrientes del Presupuesto General) y un total de 3,813 millones del Programa Vial (SOPTRAVI).

También, teóricamente, se incluyen 750 millones del Programa Nacional de Desarrollo Rural (PRONADERS) y 480 millones de lempiras de la Red Solidaria “Manuel Zelaya Rosales”. Supuestamente todos los proyectos financiados por las municipalidades deben invertirse siguiendo las prioridades de los Planes de Inversión Municipal (PIM).

Los Planes de Inversión Municipal (PIM) deben ser aprobados o ratificados en cabildos abiertos por las actuales autoridades municipales. Entre los principios básicos del programa están que los beneficiarios deben ser las familias más pobres de los municipios; cada programa tiene su menú de los tipos de proyectos que puede financiar y los respectivos criterios de evaluación.

La estructuración de una agenda consensuada de desarrollo para el mediano plazo se vuelve indispensable para aprovechar la oportunidad “histórica” que existe a favor de cambios significativos. En todo caso, el modelo socio económico vigente empieza a ser cuestionado por algunos de sus propios promotores, incluyendo los términos tradicionales de los convenios entre el Gobierno y el FMI. Banqueros influyentes como Guillermo Bueso sostienen que la relación bilateral con el FMI debe cambiar a partir de que los objetivos macroeconómicos se han cumplido. “De lo que se trata, sostiene, es internacionalizar las condiciones para que esa estabilidad se mantenga” (Foro: Escenarios a futuro. PNUD, Tegucigalpa, septiembre 2006)

Lo social

En los últimos cuatro años Honduras recibió miles de millones de dólares en ayuda reembolsable y no reembolsable de la comunidad financiera y cooperante internacional para respaldar programas sociales. Su impacto en reducir las condiciones de pobreza ha sido mínimo. Los beneficios sociales de la estabilidad macroeconómica alcanzada no se advierten en la mayoría de la población. El promedio relativo de pobreza se mantiene alrededor del 64% de la población, (datos oficiales) pero en números absolutos ha crecido. Independientemente del método utilizado para medir la pobreza, el problema asume características nacionales.

Según el Banco Mundial, pese a que la población está distribuida por partes iguales entre áreas urbanas y rurales, los pobres y los extremadamente pobres están abrumadoramente concentrados

en áreas rurales. Los pobres rurales suman 73.7% de todos los pobres y 86.1% de los extremadamente pobres. El núcleo duro de la pobreza se ubica en el occidente del país. Incluso en las áreas urbanas, las tasas de pobreza más bajas se encuentran en Tegucigalpa y San Pedro Sula y las más altas en Occidente y Oriente. Son varias las tendencias que llevan a esperar que, a menos que se adopten medidas de gran alcance y eficacia que desactiven los mecanismos que endurecen la pobreza y la reproducen de una generación a la siguiente, el escenario social de Honduras va a tender a agravarse en los próximos años, con desplazamientos masivos de población rural a los centros urbanos y al exterior, especialmente EEUU y España. Frente a ello el impacto de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) ha sido mínimo.

Los “hallazgos” del Banco Mundial

El economista jefe de la región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Guillermo Perry, aseguró en junio, en Tegucigalpa, que invertir en los pobres es buen negocio para todos, pues de esa manera el país crece en su Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo —dijo— en Honduras el combate a la pobreza no ha dado resultados debido al uso ineficiente de los recursos.

Perry fue el expositor principal en la conferencia “Honduras desafíos para un crecimiento sostenido y la reducción de la pobreza” que se realizó en el auditorio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) bajo el auspicio del Centro de Información para el Desarrollo en Honduras (CID), Colegio Hondureño de Economistas (CHE) y Banco Mundial.

El experto del Banco Mundial presentó la primera parte del informe “Círculos virtuosos y viciosos” cuya conclusión central es que “así como el crecimiento económico es indispensable para reducir la pobreza, reducir la pobreza en el corto plazo también ayudaría al crecimiento económico”. Reiteró que “reducir el número de pobres en el corto plazo puede generar mayor crecimiento y más reducción de la pobreza y la merma de pobres puede ayudar a más crecimiento en el corto plazo”.

Señaló que para reducir la pobreza hay que invertir recursos, pero eso no es suficiente, pues el uso de los fondos tiene que ser eficiente y transparente. Una de las políticas más efectiva es aumentar la inversión en generalizar el acceso a la educación, pero si ese incremento se va solamente en los sueldos y salarios de los maestros, y la comunidad y el Estado no se aseguran que los docentes cumplan con impartir clases, no se van a obtener los resultados esperados.

Por su lado, la economista senior del Banco Mundial, Florencia Castro Leal, dijo que entre los principales hallazgos del reporte de pobreza para Honduras, destaca que el crecimiento económico es clave para la reducción de la pobreza. “En el caso de Honduras, hemos visto recientemente crecimiento económico muy importante, pero no hemos visto reducción de la pobreza. Honduras tiene que crecer y tiene que mejorar su clima de inversiones para que pueda haber inversión productiva y creación de empleo formal que a la vez puede contribuir a la recaudación para que el gobierno tenga recursos para invertir”, comentó.

El segundo hallazgo del reporte, es que se encontró que hay una gran cantidad de niños entre los seis y 17 años que no están yendo a la escuela y al colegio, los niveles de malnutrición son muy altos y a la vez el acceso a la salud es muy bajo en cantidad y calidad.

El tercer hallazgo fue que la mitad del gasto en Honduras es gasto social y una tercera parte es gasto para la ERP y la mitad del conjunto de esa inversión no llega a los pobres.

No hace falta estudios profundos para confirmar, efectivamente, que en el país no existe transparencia en el uso de los recursos de condonación de la deuda y se manejan cifras irresponsablemente, creando expectativas inalcanzables para los pobres. De 4 mil millones de lempiras anunciados por el ex Presidente Maduro para la ERP en el 2005, la suma se redujo a 700 millones en el 2006, a ser distribuidos entre las 298 municipalidades, de los cuales únicamente fueron otorgados alrededor de 300 millones al cierre del año.

En contraste, las pérdidas este año de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se estiman en 200 millones de dólares, con lo cual el Estado pierde más por un mal manejo de sus recursos que los ingresos que le llegan para reducir la pobreza.

Un gerente que intentó, pero no pudo

Sin advertir que tendría sus días contados como funcionario, en marzo el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) Juan Bendeck, se comprometió a divulgar la lista de personas e instituciones morosas con esa entidad. Bendeck dio un plazo de tres semanas, pero no duró tanto en su cargo.

El funcionario indicó que para agilizar la depuración de información de los cientos de morosos con el Estado, incorporó al empresario Héctor Bulnes para que efectuara con éxito esa labor.

En ese sentido, Bulnes pidió al gerente de la ENEE un compás de espera de al menos 20 días y que le ponga las herramientas que necesita para realizar su trabajo ya que acaba de llegar a esa entidad y su posición será de cooperación y lealtad al Estado.”Les pido que no tengan la menor duda, que jamás por mi mente me va a pasar, el no tener que denunciar a alguien que está causándole un daño al pueblo hondureño”, destacó en aquella oportunidad.

Bendeck comentó que a pesar que su nombramiento al frente de la ENEE era reciente, ya había identificado a tres sectores que a través de los años le han hecho un daño terrible a esa entidad; el gubernamental, los empleados que en ella han laborado y los políticos que no pagan su consumo. “La ENEE es una empresa sumamente poderosa, no debería estar en el estado calamitoso en la que se encuentra actualmente” señaló.

Para acompañar sus palabras con hechos, Bendeck ordenó un operativo de corte de energía eléctrica a las personas que no están al día con sus pagos, especialmente en las colonias residenciales. En esa acción la tijera sorprendió sin pagar a tiempo su factura al presidente del COHEP quien protestó por lo que consideró un atropello.

Bendeck no duró mucho después en su cargo. Su sustituto, Leo Starkman, tampoco duró mucho, aunque por razones distintas. Al final de todo, la ENEE conserva sin cobrar una mora aproximada de mil 418 millones de lempiras, el doble de la cifra oficial que se entregaría a las 298 alcaldías para superar sus condiciones de pobreza en el marco de la ERP.

Mientras los grupos privilegiados reciben más y más privilegios, la pobreza de la mayoría aumenta pese a que cada año sube el gasto social en relación al PIB. El gobierno actual sostiene que en el 2006 los fondos que invirtió para reducir la pobreza superarán los 21 mil millones de lempiras, pero incluye gasto corriente en salud, educación y otras áreas de la administración pública que son verdaderos pozos sin fondo.

En todo caso, el mayor gasto público no significa mayor inversión efectiva en combate a la pobreza.

LA “REP” EN LUGAR DE LA “ERP”

La forma arbitraria en que el gobierno y el Congreso Nacional distribuyeron este año los recursos derivados de la condonación de la deuda externa dejó en claro que la intención oficial es la Reducción de la Estrategia contra la Pobreza (REP) y no tanto la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP). Según datos oficiales, el 64 por ciento de los hogares hondureños viven en la pobreza y la mitad de esta cantidad está bajo la línea de la miseria, sobreviviendo con un dólar diario, o sea 19 lempiras.

Los esfuerzos por reducir la pobreza han sido más retóricos que efectivos, aunque un insólito informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) afirmó en octubre que en el primer año de gobierno liberal el porcentaje de pobreza se redujo en un 3.8%, lo que significa que alrededor de 300 mil personas dejaron de ser pobres. La justificación de esta cifra, por increíble que parezca, se la achacan a una rebaja en el precio de la canasta básica de alimentos tanto en el área rural como urbana.

Asimismo, en el actual gobierno se habla que para este año se destinaron 20 mil 810 millones de lempiras a la reducción de la pobreza, de un presupuesto del gobierno central de 43 mil millones, y de un presupuesto general -incluye el gobierno central y todas las instituciones descentralizadas- de 83 mil millones.

El aumento de la proporción del gasto social en relación al PIB es real, pero no su impacto porque la mayor parte de esos recursos, alrededor del 80%, se destinan para cubrir gasto corriente —sueldos, salarios, privilegios- y para financiar las prestaciones laborales de miles de empleados públicos que fueron despedidos con el advenimiento del nuevo gobierno. El FOSDEH estima en unos 480 millones de lempiras el fondo destinado a pago de prestaciones por efectos de la “escoba roja”.

El FOSDEH advirtió que si el gobierno hubiera cumplido lo pactado, para el 2006 la inversión en la ERP hubiera sumado dos mil 770 millones de lempiras, pero al final, a nivel municipal no llegó ni siquiera a los 700 millones prometidos. Lo más significativo del año no fue la ejecución de la ERP, sino la decisión del Congreso Nacional de cambiar el marco legal para los recursos de condonación, vía reforma del artículo 22 de la ley del Presupuesto General de la República.

El FOSDEH ha manifestado que con el dinero de los pobres se está cubriendo gran parte de los compromisos de campaña electoral, como el subsidio para la sostenibilidad artificial del precio de los combustibles a nivel interno, el cual ha significado una erogación de 20 millones de lempiras semanales. Con estos mismos recursos el gobierno también busca cumplir el compromiso de campaña electoral de matrícula gratis y de la contratación de dos mil policías más.

En este aspecto la crítica no es el destino de esos recursos, sino su procedencia. Al ver la realidad con que se desarrollan los hechos en el país no hay duda de que la reducción de la pobreza para el año 2015 seguirá siendo nada más un deseo en un país de improvisaciones, donde se abusa del recurso de los pobres, donde éstos con sus impuestos subsidian a un pequeño grupo de ricos, donde existen grupos privilegiados que no pagan impuestos o donde se firman tratados comerciales sin tomar precauciones de sus impactos y donde la lucha contra la corrupción es una farsa.

La propia Ministra de Finanzas en una comparecencia ante el pleno del Congreso Nacional, sobre el uso de los recursos de condonación de deuda y su aplicación en la ERP indicó que alrededor de 5,100 millones de lempiras anuales no se captan debido a las exenciones fiscales.

Los análisis del FOSDEH que coinciden con el de otros organismos como los del Consejo Económico para América Latina (CEPAL) muestran que con la tendencia observada, en el tiempo que tiene de aplicación la ERP y después de haber suscrito los compromisos de alcanzar las Metas del Milenio, prácticamente la reducción de la pobreza contemplada para el 2015 se alcanzaría hasta el año 2040.

Modelo económico versus modelo social

En el 2006, las demandas de las organizaciones sociales incluyeron temas claves relacionados con el medioambiente, entre ellos: derogación de la Ley de Minería, derogación de la Ley Forestal, derogación de la Ley de Modernización y Desarrollo Agrícola, derogación de la ley que promueve el concesionamiento y privatización del agua potable, oposición al proyecto de construcción de la Represa El Tigre (frontera con El Salvador), la solicitud de emisión de un decreto de veda para la explotación comercial e industrial del bosque, aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, aprobación de nuevas reformas a la Ley de Estrategia de Reducción de la Pobreza y la aplicación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. En ese esfuerzo de incidencia, la defensa del medio ambiente fue una de las de mayor riesgo. Prueba de ello son las amenazas de muerte contra el sacerdote católico Andrés Tamayo, quien encabeza un fuerte movimiento de resistencia cívica a la tala irracional de los bosques.

El conjunto de las reivindicaciones ciudadanas sigue chocando con una realidad: el Programa Económico de Ajuste Estructural (PAE) iniciado en 1990 y que prioriza incentivar la inversión de capital, especialmente extranjera. Ese enfoque se definió como una variable clave para el crecimiento del país. Por ello el gobierno del Presidente Zelaya no dudó en ratificar el Tratado de Libre Comercio negociado entre Centroamérica y EEUU que había negociado Maduro.

En ese ámbito, el gobierno del Manuel Zelaya Rosales sigue la tendencia de ratificar y ampliar el paquete de rubros en los que se privilegia la inversión. A las maquilas, minería y turismo se menciona una cartera adicional de oportunidades en las áreas de agro alimentos, medioambientales, energía renovable y gestión de agua.

Las implicaciones de esa política gubernamental con el medio ambiente son, en muchos casos, directas. Un ejemplo de ellos es la minería. La industria minera genera en Honduras unos 45 millones de dólares anuales por exportaciones. Los metales más explotados son el plomo, la plata, el zinc y, en menor cantidad, el oro. La pregunta ante ese negocio es ¿quién gana y quiénes pierden?

La Pobreza detrás de la minería

El cardenal Oscar Andrés Rodríguez, Presidente del FOSDEH, hizo en junio un llamado enérgico a la industria minera que opera en Honduras, para que la explotación de minerales se haga sustentada en el respeto a las leyes y a la ética que deben mantener las empresas nacionales y transnacionales. El cardenal se expresó en esos términos durante el lanzamiento de la campaña ambiental “La Pobreza Detrás de la Minería” por parte de la Alianza Cívica por la Reforma a la Ley de Minería y la Agencia Católica de Inglaterra, Caford, en la que resalta la exigencia para que la minera Entre Mares que opera en el valle de Siria, elimine de sus prácticas el método de explotación a cielos abiertos.

“Detengamos la pobreza que esconde la minería sin reglas éticas”, dijo el Cardenal, tras añadir que “la actual Ley de Minería es generadora de injusticias, ya que no protege eficientemente los recursos naturales básicos para la subsistencia de las comunidades”. Pese a la intensidad del reclamo ciudadano en contra de la explotación minera irracional, en el 2006 el mayor logro fue el compromiso del presidente Manuel Zelaya Rosales a favor de prohibir la explotación de oro y plata a cielos abiertos.

“Necesitamos hacer oír nuestra voz a los consumidores de oro, a aquellos que de forma inconsciente e indiferente adquieren piezas de oro, sin conocer su procedencia, así como tampoco los costos reales que ha implicado su producción para los pueblos como Honduras”,

añadió el cardenal. Rodríguez dejó claro que la campaña contra la explotación del método de cielos abiertos no es una oposición al desarrollo como reiteradamente han dicho algunas personas, pero si un reclamo a favor de la justicia ambiental.

La concesión de licencias ambientales para expandir la explotación minera ha sido una de las prácticas más criticadas en el país, tanto por las poblaciones afectadas, como por grupos ecologistas y las propias alcaldías. Se estima que 35 mil 359 kilómetros cuadrados han sido concesionados para exploración y explotación minera. Entre las zonas de mayor impacto negativo destacan el Valle de Siria, donde opera la compañía transnacional Entremares (EEUU), y el departamento de Copán, donde operan las empresas Maverick (Canadá) y Minerales de Occidente S.A. (Honduras). Una de las prácticas que recibe más oposición es el método de extracción mineral a cielo abierto, lo que implica tala de árboles y contaminación de aguas. El gobierno actual se ha comprometido a no autorizar más explotaciones a cielo abierto, pero a dejar vigentes los permisos ya concedidos antes del 27 de enero del 2006.

Nuevas legislaciones como la Ley de Estímulo a la Producción, a la Competitividad y Apoyo al Desarrollo Humano no llegan a establecer una relación entre propuesta económica, medio ambiente y cultura. El modelo de crecimiento económico debe contar con una adecuada gestión ambiental para que se convierta en una herramienta efectiva de desarrollo. El fomento de la inversión turística no debe hacerse a costa de atentar contra la preservación del patrimonio de bosques, de biodiversidad, de mares y bordes costeros.

Los recursos naturales y los servicios ambientales que producen los ecosistemas deben ser la base necesaria para impulsar la creación de empleos productivos, la creación de riqueza y oportunidades para la gente. Ese tema es parte fundamental de la Estrategia de Reducción de la Pobreza y de los Objetivos de las Metas del Milenio, que son políticas sociales prioritarias, sin embargo, la institucionalidad pública agrícola aún no asume su papel en esas estrategias de manera coherente e integral. De hecho, el medio ambiente siguió siendo el sector de mayor conflictividad entre el Estado y la ciudadanía organizada, pese a que el Zelaya decidió destinar el 1% del PIB a la protección de los recursos naturales, sin precisar los contenidos efectivos de esa inversión.

La denominada “seguridad medioambiental” es uno de los compromisos más publicitados del Presidente Zelaya. Su acción más notoria ha sido militarizar algunos de los bosques más importantes y conflictivos, funcionando en la práctica como una veda forestal. La crítica ciudadana es que esas medidas se concretan sin una efectiva participación ciudadana y comunitaria.

En lo social y asociado al medioambiente destaca la pobreza extrema e inalterable de los pueblos indígenas, que constituyen un 6.5 % de la población, con tasas de miseria mas altas que los mestizos y ladinos. En promedio, un 71% vive debajo de la línea de pobreza, especialmente el pueblo lenca. Cabe destacar que el repunte reivindicativo de los pueblos indígenas y negros que sobresalió a principios de la década de los 90 se ha debilitado progresivamente en los últimos años, al grado que instancias de organización y coordinación se han reducido a una representación formal, más que real.

Desequilibrios con la ERP

En marzo, el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), André Marchant, confirmó la contratación, por parte del gobierno de Honduras, del experto de nacionalidad mexicana Miguel Zequelin, a quien le encargaron redefinir y obtener resultados a partir del nuevo enfoque de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP).

Marchant explicó que la intención del gobierno era que los proyectos definidos en la pasada administración se orienten a obtener resultados tangibles en beneficio de la población hondureña. El experto mexicano aportará “una nueva perspectiva y una gran experiencia para manejar temas sociales, como en el caso particular de México y en otros países de América Latina”, precisó.

El BID tiene destinados 249 millones de dólares para el desarrollo local y a la gestión municipal, que forman parte del proceso de descentralización que se lleva a cabo en Honduras.

Respecto a las manifestaciones simbólicas de la cultura, éstas se consideran una de las mejores plataformas para abordar temas de relevancia social, sin embargo, la vida cultural de Honduras ha perdido un cierto grado de identidad con el desarrollo, lo cual le ha restado sentido crítico.

Otros mecanismos de difusión y creación de cultura, como el internet y la era tecnológica tienen cada vez más presencia en las ciudades grandes, intermedias y en los municipios. En menos de diez años ha crecido de unos cinco mil usuarios a más de 200 mil usuarios diarios, lo que implica el desafío no sólo de recibir esa información, sino procesarla y que sea de calidad.

En el área rural se multiplican los negocios particulares de recepción de internet y los telecentros, que forman parte de estrategias gubernamentales y no gubernamentales de difusión. En muchos casos ya están prestando servicios de intercomunicación entre las familias de emigrantes, tanto las que se quedaron como las que se fueron.

La creciente cobertura informática se suma a la persistente expansión mediática que vive el país. Más de 60 canales de televisión abierta (locales, regionales y nacionales), más de 300 estaciones servidoras de televisión por cable, más de 200 radioemisoras, cuatro periódicos impresos de cobertura nacional, varios periódicos digitales y revistas llegan a una audiencia creciente.

Llama la atención que un 86% de las viviendas en los barrios marginales urbanos de Tegucigalpa y San Pedro Sula cuentan con televisores, sin embargo, la oferta mediática no se corresponde a una oferta temática. No necesariamente se está generando una nueva sensibilidad crítica entre la población. Hay muchos canales de difusión, pero la información que se divulga suele ser la misma entre todos, con algunas excepciones. Para empezar los medios han confundido el término cultura con espectáculo, y las páginas sociales y deportivas cubren el mayor espacio.

En este campo el trabajo de la ciudadanía organizada sigue siendo pequeño. En el contexto nacional el papel de los medios de comunicación es cada vez más importante, pero preocupa que se concentre en pocas manos. El control de los grandes medios se reduce a cuatro familias (Ferrari-Villeda, Canahuati-Larach, Rosenthal y Flores). Un elemento distorsionante en el tema de la libertad de expresión y el derecho a la información es que esas familias son propietarias de conglomerados de

empresas, muchas de las cuales tienen como cliente al Estado. Ese conflicto de intereses no se discute en el país, pese a la existencia de voces que se lo propongan y a los arrebatos públicos del Presidente Zelaya en contra de periodistas y medios.

Vulnerabilidad latente y creciente

Las condiciones humanitarias del país siguen “estables”, pero frágiles en el 2006. El perfil de riesgo del país ante las amenazas naturales y sociales es muy alto. Paradójicamente el Comité Permanente de Contingencias (COPECO) apenas comenzó en el 2006 su planificación estratégica para los próximos años. Esa ausencia refleja que sigue careciendo del presupuesto y de la voluntad política real y necesaria para garantizar sus funciones.

Hay un trabajo personal comprometido en sus funcionarios de dirección, pero sin el debido respaldo del gobierno central. La vulnerabilidad social y física del país aumenta con los años, aunque se ha tenido la suerte que desde el huracán Mitch (1998) no se ha repetido otro fenómeno de esa naturaleza.

El temor al impacto de otro huracán, tormentas tropicales y sequías es permanente y crea un estado de vulnerabilidad psicológica y material entre la población.

Al menos 165 barrios de la capital Tegucigalpa se encuentran asentados en zonas de riesgo, expuestos a deslaves en la época de invierno. Esa situación se vive en otras regiones del país, particularmente en el litoral norte, donde lluvias copiosas provocan inundaciones inmediatas. El Valle de Sula, columna vertebral de la economía, pasa en permanente riesgo.

En septiembre y en los últimos días de diciembre del 2006 las autoridades evacuaron a centenares de familias, sobre todo de la costa atlántica, afectadas por el desborde de ríos como el Ulúa, el más caudaloso del país. La época lluviosa comienza tradicionalmente en mayo y concluye en noviembre en Honduras. Bajo esas condiciones los programas de emergencia y asistencia dejan de ser temporales, para volverse permanentes.

Con la ayuda de la cooperación internacional se han multiplicado las capacitaciones en prevención de desastres, sobre todo en las zonas rurales, pero pasos fundamentales siguen sin darse, entre ellos la inclusión de esa temática en los planes de estudio de las escuelas primarias y de los institutos de secundaria.

Desde ciudadanía se reclama mayor conciencia sobre la vinculación que hay entre la ocurrencia de los desastres naturales y los objetivos de la Estrategia de Reducción de la Pobreza y de los Objetivos del Milenio.

El impacto macroeconómico negativo derivado de las inundaciones y sequías siempre tiene costos humanos diversos y repercusiones a corto y largo plazo en las actividades productivas y en los

esfuerzos por reducir los indicadores de pobreza. La seguridad alimentaria está estrechamente ligada a las condiciones medioambientales. Hay hambre, y es cotidiana en los sectores más excluidos, pero en el año no se han presentado brotes de hambruna excepcionales, salvo cuando ocurre una catástrofe natural. Un buen ejemplo de ello es lo que ocurrió en el 2005 y 2006 en La Mosquitia (extremo nororiental), con numerosas comunidades reclamando alimentos por la destrucción de sus cultivos a raíz de inundaciones. Entre los grupos más vulnerables se citan, por supuesto, las mujeres y los niños.

¿Desafíos?

Desde el punto de vista de los Organismos Financieros Internacionales se trata de focalizar recursos en la pobreza extrema, acelerar y ampliar la base del crecimiento económico, invertir en capital humano y mejorar la eficiencia e impacto de la inversión pública social.

Los recursos provenientes de la iniciativa HIPC, del Club de París y eventualmente del BID, debieran financiar una estrategia efectiva de combate a la pobreza, pero eso, como se ha reiterado, no ocurre, y el manejo más bien desacredita el alivio obtenido, con repercusiones inmediatas y a futuro.

Promesa en peligro

En enero, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Luis Alberto Moreno, aseguró que la condonación de la deuda externa de Honduras con ese organismo multilateral marchaba por buen camino, sin embargo, al cierre del 2006 las perspectivas no son tan halagueñas; algo pasó en el ínterin. La deuda de Honduras con ese organismo suma más de 1,400 millones de dólares. Moreno ya había advertido que la condonación de la deuda externa de Honduras con el BID es un proceso lento que implica una serie de consultas, pues “a la hora de la hora alguien tiene que poner la plata”.

“Yo quisiera poder ser quien dijera: se condona la deuda a Honduras, pero no lo puedo hacer porque es un tema de los accionistas del Banco Interamericano de Desarrollo”, expresó Moreno. Añadió que desde afuera a Honduras se le ve como un país pobre, pero con una enorme posibilidad de avanzar a través del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (RD-Cafta) de las condonaciones de la deuda externa y fundamentalmente por el buen manejo de la economía.

“Soy optimista que vamos a lograr un resultado, pero no quisiera comprometerme a nada mientras no haya sido resuelto en su totalidad por los accionistas y haya sido tratado tanto por la junta directiva del BID como por la asamblea de gobernadores del banco compuesta por los ministros de Hacienda de los países socios”, lo que resultó, para desgracia nacional, un comentario premonitório.

La verdad es que ya hay una resolución de condonación de deuda por parte del BID, pero es menor a lo que se esperaba y aún falta definir la operabilidad en términos de la fecha de corte y por lo tanto los montos reales a condonar.

Para la sociedad civil el reto más bien es fortalecer la transparencia en el uso de los recursos, aumentar la participación ciudadana en la ERP y transformar la ERP de un “programa” a una “estrategia” y una política pública, de carácter nacional y que oriente el desarrollo del país.

En ese contexto de posiciones encontradas se visualizan tres aspectos positivos en el 2006: la multiplicación de comisiones municipales y/o locales de auditoría social que vigilan el uso de los recursos públicos, la existencia de cinco estrategias regionales de combate a la pobreza (Occidente, Valle de Sula, Centro, Sur, Valle del Aguán) y una creciente vinculación de la política fiscal con el tema de la inversión pública social.

En contraste, preocupa la politización de la ERP, que incluye la decisión de que los recursos destinados a la misma se manejen directamente por los alcaldes (298). En el debate no se discute la importancia de incorporar los alcaldes, pero se advierte el riesgo de que la mayoría de las alcaldías no tienen capacidad operativa para administrar los recursos, que la tendencia será satisfacer promesas electorales y no una planificación estratégica de mediano y largo plazo (que se supone ya existe en la mayoría de los municipios aunque sea principalmente a “inversión visible de cemento” y no incorpora la parte productiva y el “desarrollo social”) y que la ayuda se transforme en un instrumento para dar trabajo a los activistas políticos del partido que gobierne el municipio.

De altísima preocupación es que, según diversos estudios, Honduras muestra evidencias de sólo avanzar a ritmo adecuado en tres de las Metas del Milenio: matrícula universal en nivel primario, reducir a la mitad la fracción de población sin acceso a fuentes de agua mejoradas y reducir la mortalidad materna en tres cuartos; esto referido a promedios nacionales, la situación empeora cuando se revisan los promedios municipales, especialmente de los municipios más pobres del país.

No obstante es grave que los “avances” son insuficientes en metas como reducción de la desnutrición en menores de cinco años en la mitad, reducción de la mortalidad de menores de cinco años en dos tercios y reducción de la mortalidad infantil en dos tercios, así como la reducción de la pobreza extrema a la mitad.

Asimismo, la desigualdad se mantiene en niveles elevados. En base al consumo, el quintil menos pobre consume más del 50% del consumo total; y el 20% más pobre consume sólo 5%.

En el trasfondo del escenario nacional de pobreza y desigualdad no puede dejar de mencionarse la corrupción, todavía campante en el país, como el “impuesto de guerra” más caro que se cobra porque es en vidas. Cada lempira desviado a bolsillos particulares significa una medicina menos en los hospitales, un pupitre que no se hace, una vivienda social que queda en puros planes o una cancha deportiva que deja de construirse, una parcela de tierra que deja de cultivarse.

La corrupción sigue ganando

Honduras continúa con un índice muy bajo en el control de la corrupción, según el último informe de Transparencia Internacional, divulgado en noviembre, aunque las autoridades del gobierno sostienen lo contrario. El informe dice que Honduras apenas tiene un 2,5 por ciento de lucha contra la corrupción, en una escala que se mide del cero al 10 y que establece el nivel de control de ese mal. Esto es, si un país obtiene el nivel cero equivale a niveles más elevados de corrupción, y el 10 es el nivel más bajo. Los logros en Honduras son muy pocos. Al cierre del año la Asociación de Fiscales pidió al Fiscal General Leonidas Rosa Bautista que permitiera que los juicios contra los poderosos que están “engavetados” en el Ministerio Público sean llevados a los tribunales. El Fiscal respondió que es imposible actuar, porque en Honduras la palabra corrupción no existe en su Código Penal. Así de irreal es el país.

Lo novedoso del año es que el gobierno de Estados Unidos ratificó la mala aplicación de justicia en Honduras y castigó con suspensión de su visa al ex presidente Rafael Leonardo Callejas, acusado de actos de corrupción que en el país los entes fiscalizadores no le han podido comprobar, y los juzgados le han entregado varias cartas de libertad. Lo mismo pasó con un funcionario del actual gobierno, empleado de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, Rogelio Clara, quien le fue revocada su visa por corrupción. Estados Unidos alega que a Callejas se le suspendió la visa de por vida por estar acusado de “corrupción oficial pública”, pero los controles en Honduras siguen sin castigar a los corruptos. La cronología anual del FOSDEH refleja la magnitud de ese mal, una verdadera pandemia, que significa pérdidas superiores a los ocho mil millones de lempiras anuales.

Los resultados del Índice de Percepción de Corrupción –IPC- 2006 ponen de manifiesto una fuerte correlación entre corrupción y pobreza. Casi tres cuartas partes de los países del IPC tienen una puntuación inferior a cinco (incluidos todos los países con ingresos bajos y todos los estados africanos, menos dos), lo cual demuestra que la mayoría de los países del mundo se enfrentan a unos niveles graves de corrupción nacional percibida.

Ante esa realidad, el FOSDEH hizo suyos, en el transcurso del año, los criterios de Probidad, en el sentido de:

- Reconocer que la corrupción constituye una de las principales fuentes de violaciones de derechos y exclusión en todo nivel lo cual es propicio para el aumento de los niveles de pobreza y el deterioro de la gobernabilidad democrática.

- A pesar de la existencia de algunas políticas e iniciativas sociales frente a este flagelo – como los comités de auditoría social- aún es posible observar la falta de aplicación y seguimiento de estas políticas, lo cual favorece a las desigualdades económicas y sociales entre los ciudadanos.

De lo que el FOSDEH está convencido es que la participación ciudadana frente al combate de la pobreza y el fomento de la gobernabilidad democrática será posible en la medida que se fortalezca el respeto y ejercicio de sus derechos , entre ellos el acceso a información pública, rendición de cuentas y reglas claras, a través de las legislaciones y el fortalecimiento de las instituciones.

En ese sentido, pese a que el proceso electoral del 2005 garantizó la continuidad de los políticos y sus partidos, el país no va bien. Tiene elementos positivos – como se advierte en el análisis – pero su “norte”, su verdadero norte interno, no está claro o no existe en función de los intereses de la mayoría de la población. Una prueba irrefutable es el avance imparable de la inseguridad ciudadana, de la violencia organizada y común que suele acompañar los Estados fallidos. Las cifras de esa descomposición están al alcance de todos y todas. Basta leer los periódicos, especialmente los lunes, para percibir su magnitud. Ojalá, por el bien común, impere en quienes tienen el poder la cordura para entender que las reformas verdaderas, las que apuntan a la equidad social, no pueden esperar más.

Tegucigalpa, 2006

www.fosdeh.net

